

Iritzia

Behatokia

POR
Joaquín
Arriola



No hay trabajo

Los gobernantes son sensibles a este diagnóstico, pero dicha aflicción parece tener un carácter más retórico que real por cuanto ninguna de sus políticas se orienta a crear empleos

UNO de cada diez encuestados por el Centro de Investigaciones Sociológicas responde que la situación económica es regular, cuatro la consideran mala y cinco afirman que es muy mala, y sólo uno de cada cuatro confía que la cosa mejore dentro de un año. La causa de tanta desazón se sitúa en el enorme desempleo, el principal problema para más de la mitad de los ciudadanos españoles, seguido por la corrupción política, el principal problema para la cuarta parte de los encuestados, o la situación económica general, según uno de cada diez. Cuatro de cada diez personas se ven afectadas directamente por el desempleo existente, personalmente o en su entorno familiar y ambiental.

Los gobernantes son sensibles a este diagnóstico y cada vez que se les pregunta responden que su principal preocupación, motivo de todos sus desvelos, es el paro. Pero a tenor de sus actuaciones dicha aflicción parece tener un carácter más retórico que real por cuanto ninguna de las políticas puestas en marcha para enfrentar la crisis, ni por parte del Gobierno central ni por los autonómicos, se orienta a crear empleos, sino más bien lo contrario.

A corto plazo, se han aplicado un conjunto de medidas urgentes de gran calado: una reforma constitucional para garantizar el

pago del servicio de la deuda externa por encima de cualquier otro compromiso de gasto; un préstamo extraordinario de la Unión Europea público para realizar un saneamiento bancario que se ha llevado por delante todo el patrimonio financiero común (las cajas de ahorro); una profunda reforma de los procedimientos y costes de contratación, despido y fijación de salarios para lograr un aumento de la rentabilidad de las inversiones; una reducción de las administraciones para reducir el coste de la financiación del presupuesto público español en relación a lo que le cuesta al gobierno alemán (la "prima de riesgo"), que con más del doble de deuda pública (en 2013, 2,1 billones de euros frente a 955 mil millones), paga menos de la mitad de intereses por cada euro (en marzo pasado, 1,5% frente al 3,3% en los títulos de deuda española a largo plazo).

Tampoco las transformaciones estructurales de la economía se orientan directamente a la creación de empleos: al transferir más recursos del Estado al mercado (bajada de cotizaciones sociales, reducción de impuestos/aumento de subvenciones, privatizaciones) no se crean más empleos, antes al contrario se reducen, aunque en menor medida que la reducción obtenida en remuneración de asalariados. El principal logro de las reformas estructurales es que con menos salarios se produzca más valor; en 2009, por cada 100 euros de valor se remuneraba con 50 a los asalariados, mientras que en 2013 se ha bajado a 45 (por cierto, que este objetivo aun no se ha conseguido en Euskadi, donde los asalariados todavía recuperan más de la mitad del valor añadido que generan). Pero tampoco así se crea empleo, pues el aumento de la propensión exportadora de la economía que se ha conseguido con estos procedimientos de devaluación salarial ha sido a costa de la demanda interna, así que en este caso vale lo de *lo comido por lo servido*. Pretender que bajando el precio del trabajo va a aumentar la demanda es confundir el mercado de trabajo con un mercado de verduras: los compradores de trabajo no lo adquieren por lo que tienen que dar por él, sino por lo que creen que pueden sacar de él. La reducción de la demanda interna pública y privada es el principal impedimento para que aumente la demanda de trabajadores, no el precio de los mismos. Hasta ahora, ningún Gobierno central o autonómico ha diseñado una política directamente orientada a la creación masiva de empleos a corto plazo, un objetivo impo-

sible si la prioridad absoluta es pagar la deuda pública y la deuda externa pública (650 mil millones de euros, contando la del Banco de España) y privada (1.100 mil millones) en su totalidad. Tampoco se trata de volver a las andadas y generar a crédito cinco millones y medio de empleos, como ocurrió en los años buenos del euro. Pero recuperar los tres millones y medio de empleos perdidos desde la crisis requiere un cambio de políticas que subordine la gestión de la deuda a la gestión del empleo y que haga que los acreedores, en particular los extranjeros, asuman también su parte del coste por la burbuja crediticia que alimentaron y que les sirvió para producir y vender lo que de otro modo no hubieran logrado exportar.

Lo cierto es que la economía española —y la vasca no es una excepción a este respecto— se ha caracterizado históricamente por ser incapaz de generar empleos para toda la población en disposición de trabajar. Afrontar el desafío implica reconocer que el mayor problema estructural de esta economía no está en el denominado mercado de trabajo, sino en el retraso histórico en el desarrollo de los servicios propios de un estado democrático avanzado, y en una clase empresarial incapaz de desarrollar sus actividades si no es bajo la protección del Estado. Desde la muerte de Franco, solamente se han creado en España dos empresas líderes de dimensión global, capaces de dinamizar el tejido productivo: una en un sector de tecnología tradicional, pero con un sistema de comercialización y de logística tecnológicamente muy sofisticado; la otra, en un sector protegido, con elevados márgenes de beneficio, que ha atraído a todas las grandes empresas del continente e incluso de allende los mares. Pero al margen de Inditex y Mercadona, todas las demás grandes empresas españolas se fundaron durante el franquismo, o son producto de la priva-

tización de empresas públicas, en sectores como el energético, el comercial y el financiero, siempre adosados al Estado como forma de hacer negocios.

Si la tradición marca que solo el Estado es capaz de crear empresas de gran dimensión, de desarrollar nuevos sectores de actividad, no hay ninguna razón de peso para renunciar a la misma y pretender que mediante el autoempleo u otras formas de marear la perdiz como la formación (en un mercado en el solo el Estado tiene una demanda considerable de personal cualificado) o la emprenditorialidad, ese neologismo tras el que se esconde la renuncia de la acción pública, se puede llegar a crear el volumen de empleos solventes que se precisan. Solo la combinación del desarrollo de los servicios públicos y la recuperación del fomento empresarial del Estado pueden traducir en empleos, por ejemplo, la cobertura de las necesidades de cuidados personales o los suministros médicos al sistema nacional de salud (equipo, medicamentos), actualmente en manos de multinacionales que actúan casi siempre en mercados oligopólicos y, por tanto, con importantes márgenes de beneficio que encarecen el coste de los servicios públicos sanitarios mucho más de lo que pueda suponer la garantía de universalidad del sistema para todos los residentes.

El sector energético, la agricultura sostenible, el transporte, las industrias culturales... son muchas las actividades que requieren un cambio de rumbo social y económico para la que existe ya una base de conocimientos, en las universidades, el CSIC y la sociedad en general, pero que o bien las empresas existentes no están dispuestas a dar o las empresas inexistentes lógicamente no pueden ejecutar.

Pero este cambio de orientación estratégica no está en el orden del día y no se va a lograr mediante un incremento de las transferencias a las empresas, como el recogido en los presupuestos generales del Estado para 2014, que tras dos años de recortes (8,6 y 7,9 mil millones en 2012 y 2013) incrementa hasta 12 mil millones de euros los 9 mil millones habituales del periodo Zapatero. La política coyuntural de las transferencias a empresas no puede sustituir a la política estructural de la inversión pública (que se prevé va a seguir cayendo este año hasta los 4,7 mil millones, desde los 13 mil millones anuales zapateriles). Así, no.

* Profesor titular de Economía Aplicada en la UPV/EHU

Al margen de Inditex y Mercadona, todas las grandes empresas españolas se fundaron durante el franquismo o son producto de la privatización de empresas públicas

www.deia.com/ocio-y-cultura/motor

DESCUBRE CON NOSOTROS TODAS LAS NOVEDADES DEL AUTOMÓVIL

El 308 conquista el espacio
PEUGEOT

Deia MOTOR

ÚLTIMOS MODELOS DE TODAS LAS MARCAS

**MODA, BAÑO
MEDIAS Y
COMPLEMENTOS**

K A L A

cambio de dirección
Avenida Basagoiti, 67 (antes 50)

☎ 94 460 24 51 - 48990 ALGORTA (Bizkaia)